

LA REPRESION FRANQUISTA y POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

Carme Molinero
UAB/CEFID

En los últimos veinte años se ha consolidado un cambio cultural que reivindica la memoria frente a la historia. No es aquí el momento de entrar en la cuestión que tiene, además, múltiples dimensiones. Señalo sólo, al hilo de mi intervención, que historia y memoria tienen objetivos distintos: la historia conocimiento -saber crítico del pasado- y la memoria recuerdo y homenaje – autoafirmación individual y/o colectiva-, dicho de forma sumaria. Historia y memoria son dos disciplinas conectadas porque la lectura de la historia comporta siempre una batalla por la memoria al ser un componente esencial de la interpretación de la vida social en el pasado. En consecuencia la aspiración de los historiadores es que la historia informe la memoria para evitar la manipulación del recuerdo. Otra cosa es que como la memoria interactúa con los hechos objeto de recuerdo, éstos puedan adquirir una nueva o distinta dimensión con el tiempo.

Mi intervención se plantea dos cuestiones complementarias: la primera ver si, en el caso español, ya en el siglo XXI, la historia informa la memoria sobre la represión franquista y en segundo lugar argumentar por qué considero indispensables las políticas públicas de memoria.

¿Ha influido el conocimiento histórico en la memoria pública que en la actualidad está extendida en torno a la represión franquista?. Yo pienso que la respuesta es afirmativa y que la cuestión es importante porque, durante décadas, el discurso público hegemónico sobre la guerra civil y sobre el propio régimen franquista estuvo condicionado por la argumentación que había propagado la propia dictadura.

Es decir, aunque era un hecho sabido que la magnitud de la represión franquista había sido extraordinaria, y su existencia estuvo presente siempre entre sectores amplios de la sociedad, que la habían sufrido o la habían observado de cerca, no había sido posible estudiar la represión ni debatir sobre ella; esta situación se explica porque la manipulación de la memoria fue uno de los principales instrumentos de legitimación franquista. Que el tema generaba interés

lo demuestran las publicaciones de la segunda mitad de los años setenta, ya muerto Franco. Se publicaron en aquellos años muchos artículos sobre aspectos bien diversos, desde la existencia de fosas clandestinas a las memorias de personas que habían luchado en el maquis, etc. Sin embargo, estos trabajos no dejaban de ser mayoritariamente publicística, sólo destacable en tanto que era indicativa del interés social.

Pero la presencia pública de estas temáticas se apagó porque, como es bien sabido, en la actualidad son los medios de comunicación y no los historiadores los que determinan la relevancia social de las temáticas históricas. Aquellos dictaminaron que la guerra civil y la represión posterior no interesaban. El gobierno –que, recordemos, era socialista desde 1982- actuó en la misma dirección y voces tan autorizadas como la de Alfonso Guerra dijeron entonces –ahora han cambiado su posición- que de la guerra civil y del franquismo era mejor no hablar; que era necesario concentrar todas las energías en el futuro -la modernización- y no en el pasado, marcado por la división y los traumas.

Afortunadamente, es frecuente que una parte de la historiografía tenga una agenda propia y en los años ochenta los historiadores empezaron a investigar sistemáticamente sobre la represión franquista y parte de ese conocimiento historiográfico ha dotado de base empírica a los movimientos que durante años han reivindicado el reconocimiento de las instituciones democráticas a las víctimas del franquismo.

Llegamos así a mitad de los años noventa, cuando el pasado consiguió colarse finalmente en la agenda política. Eso fue posible por dos factores fundamentales: uno específicamente español y otro de carácter internacional. Como es bien sabido uno de los fenómenos culturales y políticos más notorios de los últimos años es el surgimiento de la memoria como una preocupación central de la cultura y de la política de las sociedades occidentales, un giro de la mirada social hacia el pasado que contrasta de manera notable con la tendencia a privilegiar el futuro, tan característica del siglo XX.

En este punto la atención que se presta en España a la memoria se inscribe en un fenómeno mundial. Y es que España no es diferente aunque el hiperactivo ministro de Franco, Manuel Fraga Iribarne, popularizara el lema “España es diferente” como reclamo turístico. En realidad lo que tenía entonces carácter

excepcional en el contexto de la Europa occidental era el régimen político que la gobernaba. Excepcional y traumático.

Lo que es específico es el objeto de memoria porque, como bien señaló Andreas Huyssen, la cultura de la memoria es tan amplia como variados son los usos políticos de la memoria y, a la vez, el ámbito político de las prácticas de la memoria son siempre nacionales. En España el objeto memorial por excelencia es la memoria de los vencidos de la guerra civil, que había sido silenciada sistemáticamente durante los casi cuarenta años de duración del régimen franquista y que en buena medida también lo fue en las dos décadas siguientes.

En diversas ocasiones se ha querido presentar el movimiento denominado de recuperación de la memoria como una maniobra política por parte del gobierno socialista, que cambió de actitud respecto a la cuestión a mediados de los años noventa. La utilización política de la cuestión es evidente y es innegable que en los años noventa las reivindicaciones sociales en torno a la memoria pudieron contar finalmente con el apoyo del PSOE que, debilitado tras una década de gobierno, estaba interesado en aquel momento en recordar el pasado franquista de muchos de los dirigentes del Partido Popular. Sin embargo, hay que decir que para que, una década después, un gobierno del PSOE convirtiera la aprobación de una ley de *memoria histórica* en uno de sus proyectos emblemáticos fue necesario que durante casi una década se produjera una movilización social notable en torno a la cuestión.

En la actualidad la reivindicación social en torno a la necesidad de políticas de *memoria democrática* continúa siendo igualmente necesaria pues sectores significativos de la sociedad española continúan manifestando actitudes de rechazo hacia la asunción por parte de las instituciones democráticas de la significación del franquismo y sus prácticas represivas sobre una parte muy amplia de esa misma sociedad. También por eso mismo los conocimientos generados por la historiografía tienen una función social fundamental en este caso.

Dedico por tanto el tiempo que tengo disponible a sintetizar brevemente nuestros conocimientos sobre la represión franquista y después señalaré por qué considero necesarias las políticas públicas de memoria democrática.

1. La instauración del régimen franquista supuso una ruptura fundamental en la trayectoria española, tanto en el plano político-institucional, como en la relación entre política y sociedad. Desde la perspectiva social uno de los aspectos esenciales a considerar para explicar esta ruptura es la magnitud y diversidad de la represión. Sin embargo, todavía en los años 80 -es decir, casi cincuenta años después de la guerra civil- no era posible hacer un cálculo aproximado sobre las víctimas mortales de la represión ejecutada por los vencedores, contrariamente a lo que pasaba con las víctimas de la zona republicana, que eran bien conocidas desde los años cuarenta debido a las diversas y complementarias campañas públicas franquistas.

Esta realidad tenía consecuencias políticas claras, pues comportaba que las imágenes de la II República, de la guerra civil y del franquismo extendidas entre sectores muy amplios de la sociedad española continuaban siendo las difundidas por la propia dictadura. Es decir, los represaliados y su entorno conocían perfectamente la magnitud de la represión pero era un conocimiento digamos privado, no socializado públicamente. Es más, lo que había sucedido durante cuarenta años es que el régimen franquista había hecho del tema de la violencia “roja” un argumento de legitimación política. Para conseguir este objetivo magnificó, manipuló, descontextualizó aquella violencia y con el paso del tiempo lo que quedó fue, como mínimo, una asociación mental, por una parte, entre desorden, II República, violencia y guerra civil, y, por otra parte, entre orden y franquismo. Es decir, el régimen franquista no sólo había impedido la investigación sobre cualquier aspecto de su política represiva sino que presentó las víctimas de aquella represión como “traidores” a la patria, que a punto estuvieron de provocar la ruina del país. Ese fue uno de los ejes de la potente política de la memoria que impulsó la dictadura.

Para los historiadores tenía interés penetrar en el fenómeno represivo, comprobar hasta qué extremo, como insistían los testimonios de los “vencidos”, el régimen se había construido sobre un baño de sangre. Como he dicho, a pesar de las dificultades, los estudios se abrieron paso y empezaron a llenar un vacío profundo de conocimientos empíricos.

Ese trabajo de los investigadores ha dado sus frutos. Ahora ya conocemos todo lo fundamental respecto a las características de la violencia franquista que llevó a la muerte a decenas de miles de personas. No obstante, se continúa

investigando porque el estudio de las víctimas mortales, además de aportar conocimiento, tiene un componente de reconocimiento social y ello lleva al terreno de la memoria. Es decir, como se ha puesto en evidencia en relación a temáticas de especial relevancia en una determinada sociedad -por ejemplo el nacionalsocialismo en Alemania- los cambios relativos a los campos de investigación y las preguntas que en éstos se plantean los investigadores están más relacionados con los relevos generacionales que no con el descubrimiento de nuevos materiales de archivo –siempre fundamentales-, particularmente cuando la distancia generacional da cabida a una curiosidad vital que no se da entre padres e hijos.

En España, desde la década de los noventa se despertó un interés social, sobre todo entre las generaciones jóvenes –la de los nietos- que querían saber qué pasó con sus familiares represaliados. A la vez, la generación de los hijos, superado el muro de silencio protector de la etapa franquista, mayoritariamente sentían ese conocimiento como reconocimiento, como un bálsamo reparador del trauma familiar. La investigación histórica mostraba la magnitud de la represión, en muchas ocasiones concretaba los nombres y apellidos de personas que habían muerto no por lo que hubieran hecho -nada en muchos casos-, sino por ser identificados como ‘rojos’, mostrándose en España, también, que el discurso de la defensa de la civilización, que pregonaban los fascismos, se apoyaba en la barbarie que deshumanizaba al ‘otro’.

El mantenimiento de estas investigaciones a escala local es una nueva muestra de que los impulsos de la investigación no se pueden separar del clima político, de lo que cada generación o parte de ella quiere saber del pasado. Hay que añadir también que, especialmente a finales de los años noventa, tomó fuerza un revisionismo de extrema derecha que volvía a sostener los argumentos franquistas. Este fenómeno no tuvo ni tiene, en mi opinión, importancia historiográfica por cuanto sus argumentos ni son nuevos –recrean el discurso franquista- ni se apoyan en documentación que los avalen. Sin embargo, esa corriente sí que tiene una gran influencia social y política por cuanto tiene detrás potentes medios de comunicación y un público deseoso de consumir su contenido y muy beligerante en el espacio público, con capacidad de influir en sectores con poca capacidad crítica. Opera, además, sobre todo en las regiones más conservadoras, que son las menos estudiadas. Todo ello ha influido, por un lado,

en la voluntad de continuar investigando sobre las víctimas mortales de la represión franquista y, por otro, ha contribuido a que muchos historiadores se impliquen en el debate sobre las políticas de memoria necesarias en la democracia española, ya que muchos comparten el axioma de que el riesgo para los muertos no honrados está en morir una segunda vez.

Paso a hacer una rápida síntesis de los conocimientos generados por estas investigaciones. Los historiadores cifran en aproximadamente 150.000 las víctimas mortales de la represión franquista, aunque posiblemente nunca se alcance una cifra definitiva dado que miles de ellos ‘desaparecieron’ y no fueron registrados nunca o fueron inscritos mucho más tarde. De esto se ha hablado ampliamente en intervenciones anteriores.

Más allá de las cifras. El rasgo prevaleciente, el que otorga plena significación a la represión franquista no tiene que ver con el volumen sino con sus objetivos y protagonistas. Para precisar el carácter específico de la represión franquista hago referencia antes a las características de la represión en la zona republicana durante la guerra civil. El peso de la memoria impuesta por el franquismo, que implícitamente había conseguido vincular el origen de la guerra civil con la II República, obviando que aquélla fue el resultado del golpe de estado contra ésta, lo hace aconsejable. También la constatación de su importancia y de la trascendencia de la violencia en la zona republicana durante la guerra, incluso para el imaginario de sectores sociales antifranquistas.

Empecemos por señalar que la violencia desencadenada después del 19 de julio de 1936 no fue republicana sino ‘revolucionaria’, una vez los aparatos coercitivos del Estado fueron incapaces de controlar la situación desencadenada por el golpe de estado. Sin insurrección militar con toda probabilidad no se hubiera desencadenado ni la guerra civil ni la revolución, que fue posible por el colapso de la capacidad coercitiva del Estado. Fue aquélla una violencia ejercida desde ‘abajo’ aunque estuvo estimulada por algunas organizaciones políticas o parte de ellas. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurrió en la zona sublevada, esa violencia en la zona republicana tuvo una envergadura muy distinta según las regiones y se desarrolló básicamente durante los primeros meses de la guerra, mientras no se reconstruyeron las nuevas instituciones republicanas, momento a partir del cual casi desapareció. Fue una violencia que afectó básicamente a los representantes

del poder tradicional: el clero y 'católicos' significados en el ámbito local y los propietarios. Perdieron la vida en esas condiciones aproximadamente 50.000 personas.

Las características de la represión franquista fueron radicalmente diferentes pues aunque también se dieron venganzas locales, la represión extrema fue la médula de la dictadura, el instrumento fundamental para la construcción del nuevo poder político, que se mantuvo con la misma intensidad acabada la guerra civil, hasta conseguir su objetivo de paralizar el conjunto de la población y asegurar la exclusión de los 'vencidos' en la «Nueva España'.

Es decir, en la zona rebelde se practicó una violencia 'desde arriba' que tenía como objetivo construir un nuevo poder político. La guerra civil fue resultado de un golpe de estado fracasado dirigido a acabar con la democracia en fase de consolidación. Hay que insistir en que los insurrectos no cuestionaban la democracia republicana sino que negaban *la* democracia porque –afirmaban- abría las puertas a la amenaza revolucionaria.

Por eso la represión franquista fue siempre muy racional, aunque variable según los contextos, porque siempre pretendió ser imprecisa en los límites de su extensión con el objetivo de que la población se sintiera insegura y actuara en consecuencia. Se trataba de doblegar la resistencia de las corrientes democráticas y de las anticapitalistas sobretudo, a la hegemonía de las corrientes conservadoras y contrarrevolucionarias, una resistencia que había podido afirmarse durante la primera mitad de los años treinta. Es decir, los insurrectos consideraban la represión y el control social imprescindible para poder imponer sin estorbos el nuevo régimen político también acabada la guerra.

Los amplios objetivos explican la magnitud de la represión: su finalidad era, además de la venganza, la sumisión. Por lo tanto, la política represiva fue solo un instrumento al servicio de la política *tout court*. Toda aquella terrible experiencia para tantos se debió a que los dirigentes del Nuevo Estado tenían un proyecto político que pretendía evitar que el "enemigo" renaciera, una voluntad aniquiladora condicionada por la cultura católica de aquel tiempo.

En ese marco de violencia 'desde arriba', la mayor parte de las decenas de miles de ejecutados lo fueron por la jurisdicción militar, que utilizó para ello la fórmula del juicio sumarísimo. Quiere ello decir que los jefes militares, que tenían

plena autonomía en su jurisdicción, tramitaban los juicios contra civiles con carácter de urgencia, en un único acto procesal, en el que mayoritariamente la acusación presentada era “adhesión y auxilio a la rebelión”. La aberración jurídica de estos enjuiciamientos fue puesta de relieve desde los primeros estudios pues se acusaba de rebelión y con carácter retroactivo -desde 1934- a los defensores del orden constitucional legítimo.

Al margen del procedimiento y el disparate jurídico en que se apoyaba la acusación, es esencial tener en cuenta que las ejecuciones continuaron ininterrumpidamente hasta 1943. Si la violencia se hubiera desarrollado 'solo' durante la guerra, posiblemente en la conciencia colectiva hubiera quedado como un fenómeno excepcional, propio de la guerra. Como después continuó con la misma intensidad la represión consiguió su propósito de paralizar al conjunto de la población durante varias décadas.

Y sobretodo, los efectos paralizantes de la represión están relacionados con los represaliados vivos más que con los muertos. Las mismas cifras oficiales señalan que en 1940 estaban encarceladas más de 280.000 personas de una población de aproximadamente 26 millones, una proporción escalofriante si el universo se reduce a los hombres, adultos como eran la mayor parte de los presos.

Aunque la mayoría eran hombres, hay que hacer mención especial a la situación de las mujeres presas porque si bien en relación a los hombres presos fueron pocas, en relación a la actividad política de las mujeres en cargos de responsabilidad fueron muchísimas, algo desconocido en la historia de España. Muchas mujeres fueron a la cárcel sencillamente por su relación familiar con perseguidos. Por otro lado, en relación a las mujeres hay que tener presente otro aspecto que da cuenta de la voluntad aniquiladora de la represión: cuando las presas tenían hijos pequeños y éstas no tenían con quien dejarlos o eran tan pequeños que debían amamantarlos, los niños estaban en la cárcel con sus madres en condiciones infrahumanas. Muchísimos murieron de deshidratación o enfermos.

Además de las cárceles, miles de hombres pasaron meses y años en campos de concentración y de trabajo. Los estudios hechos indican que hasta marzo de 1939 pasaron por campos de concentración franquistas entre 370.000 y 400.000 presos.

La dictadura franquista también utilizó batallones disciplinarios en los que concentraba los jóvenes soldados republicanos considerados contrarios al Estado Nuevo. A aquellos jóvenes se les obligó a hacer nuevamente un servicio militar de tres años, un lapso de tiempo durante el cual, si se les formulaba formalmente una acusación, podían ser encarcelados. En enero de 1939 existían 119 batallones con más de 87.000 soldados, algunos de los cuales habían sido movilizadas con 17 años.

Aproximadamente 110.000 presos fueron explotados en batallones de trabajadores en colonias, talleres y destacamentos penitenciarios, así como en empresas importantes. El trabajo de los presos fue un buen negocio tanto para las empresas beneficiarias como para el Estado. Esa mano de obra fue intensamente explotada en la construcción y reconstrucción de obras públicas como aeropuertos, líneas férreas, puertos, túneles, pantanos, aunque la obra más emblemática fue la construcción del Valle de los Caídos, el mausoleo construido a mayor gloria de Franco, donde continúa enterrado junto al primer líder falangista José Antonio Primo de Rivera.

Más allá de la represión física, la violencia contra la población considerada desafecta al Nuevo Estado tuvo en el plano legislativo otros escenarios y se plasmó en un conjunto de medidas que pueden ser calificadas de procesos inquisitoriales tanto desde la perspectiva formal como por sus objetivos. Entre ellas destacan la depuración laboral y la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, que tuvieron como resultado que centenares de miles de personas, a muchas de las cuales no se las podía acusar de nada concreto, vieran como su vida profesional o su patrimonio dependía de la arbitrariedad de los vencedores.

Los objetivos de esta legislación eran explícitos en su misma literalidad. Los decretos de depuración de diciembre de 1936 establecían “la separación definitiva del empleo de todos los que por su conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional se consideren contrarios a éste”. Es decir, la legislación aprobada preveía la penalización de las actitudes y, en la práctica, se aplicó de forma muy amplia y discrecional. A destacar que toda la legislación represiva franquista se caracterizaba por el hecho que era el acusado quien debía demostrar su inocencia y no el tribunal quien debía probar la culpabilidad.

Se podría decir que el proceso de depuración supuso una vuelta de tuerca más en la vía abierta de humillación de los individuos, que tuvieron que buscar

avales para mostrar su “no culpabilidad”. En los meses que duraba el procedimiento, cada persona experimentó particularmente, en propia piel, las nuevas condiciones que en su vida comportaban la implantación del Nuevo Estado.

Lo mismo se podría decir de la Ley de Responsabilidades Políticas. En todos los casos la indefensión de los acusados era absoluta, pues tampoco conocían en la mayoría de los casos las causas del procesamiento hasta que éste estaba avanzado.

2. Hasta aquí la síntesis de la ingente producción historiográfica que ha aportado conocimientos sistemáticos sobre la magnitud de la represión franquista. Si en los últimos años se han realizado tantas investigaciones que hoy la sociedad dispone de base empírica más que suficiente para corroborar la magnitud de aquella represión, ¿por qué son necesarias políticas públicas de memoria democrática que, lógicamente, pueden -y deben- ir más allá de las políticas de reparación?. Creo que se puede decir que en España hay un consenso relativo amplio sobre la necesidad de políticas de reparación, que plasman el reconocimiento de las instituciones democráticas hacia quienes lucharon contra la dictadura; estas políticas vienen a reflejar los imperativos éticos de las sociedades libres. No hay, sin embargo, tanto consenso sobre la conveniencia de que los gobiernos desarrollen políticas públicas de la memoria más amplias.

Considero que las políticas públicas de la memoria son una necesidad para las sociedades democráticas porque, como se ha dicho, en España el pasado está muy presente en la sociedad actual pero, a la vez, está sujeto a una presión intensa. Algunos sectores opuestos a la existencia de políticas públicas de memoria argumentan que del pasado sólo se deben ocupar los historiadores; la afirmación es demasiado amplia; de la investigación sí porque la historia debe tener como objetivo analizar una realidad dada para descubrir los nexos significativos y proponer interpretaciones. Pero ese conocimiento debe ser socializado. La producción historiográfica es ingente; no obstante, todos sabemos que la mayoría no conoce sus conclusiones, a veces ni incluso su existencia y no me estoy refiriendo ni exclusiva ni principalmente a sectores escasamente

ilustrados. En la fragmentación del mundo actual, aunque las investigaciones se publican y por tanto teóricamente son accesibles a todo el mundo, en realidad la socialización del conocimiento histórico se realiza en buena medida a través de la memoria pública -la extendida por los canales públicos y privados; el espacio público es donde se fija la visión del pasado colectivo. Es por eso que son imprescindibles políticas públicas de la memoria que, fundamentadas en el conocimiento histórico, contribuyan a fortalecer los valores democráticos.

En el caso español son especialmente importantes porque la indefinición respecto al pasado franquista está en la base, al menos parcialmente, del movimiento conocido como «recuperación de la memoria histórica». Ya he hecho alusión a que el fenómeno «conmemorativo» es de carácter mundial y tiene una explicación cultural clara: la ola de conservadurismo durante los años 80 y 90 fue paralela a la extensión de una nueva cultura política donde la utopía transformadora dejó de tener fuerza y el pasado se convirtió en foco de atención permanente, especialmente desde la perspectiva de las víctimas de la violencia política.

Pero en España, el movimiento a favor de la «recuperación de la memoria histórica» en la última década se explica en buena medida por el malestar extendido en una parte de la población respecto a la visión del pasado que parecía que se estaba asentando de forma definitiva y que se consideraba, dicho esquemáticamente, que arrojaba un velo sobre la significación y las consecuencias que había tenido el franquismo para la sociedad española.

En muchas ocasiones con la expresión «memoria de los vencidos» determinados sectores reivindican un relato del pasado que lo explique a la luz de los valores democráticos y de reivindicación de aquéllos que se opusieron a la dictadura. Porque las democracias, como cualquier sistema político, necesitan valores y, si no los tienen, la sociedad los llena con aquéllos que tiene al alcance, que no siempre se apoyan en valores democráticos.

Desde la perspectiva de lo que estamos analizando en este seminario es fundamental resaltar que las conclusiones de las investigaciones han colaborado a que se abriera el espacio público a las memorias silenciadas durante tantas décadas. La dictadura dejó una pesada herencia en el imaginario colectivo y ahora es deber de las instituciones democráticas impulsar políticas activas que faciliten la incorporación del conocimiento riguroso del pasado a la memoria pública. Las

instituciones democráticas no deben estimular la confrontación de memorias, evidentemente, pero sí ayudar a la reflexión sobre el pasado y, en la Cataluña o la España del inicio del siglo XXI, eso comporta acercarse a la significación de la guerra civil, del franquismo y sus consecuencias, así como incorporar la memoria del antifranquismo al bagaje colectivo, cosa que todavía no se ha hecho.

Historia y memoria van de la mano en este terreno. La demanda social existente de repensar el pasado ha permitido que cuando los gobiernos han sido mínimamente sensibles a la cuestión, la historia informe la memoria y, a partir de ahí, se haya ampliado el consenso social sobre la necesidad de las políticas de reparación y de reivindicación de aquéllos que se enfrentaron a la dictadura.

El trabajo del historiador alcanza todo su sentido cuando los conocimientos que acumula sobre el pasado sirven a la sociedad en la que vive. En 2007, en pleno debate sobre la Ley de *Memoria Histórica*, Jaime Mayor Oreja, dirigente del Partido Popular y diputado en el Parlamento Europeo en la actualidad, afirmó que no podía condenarse el franquismo porque “representaba a un sector muy amplio de los españoles” y, además, había entonces “una situación de extraordinaria placidez”¹. Mayor Oreja, con sus declaraciones, mostró de forma fehaciente que uno de los desafíos al que los historiadores deberán continuar atendiendo es a que la historia informe la memoria pública de sus contemporáneos.

¹ .- EL PAIS, 16 de octubre de 2007.